

1

Introducción

LA entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática¹ ha supuesto la adaptación a sus exigencias de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de todas las administraciones públicas, también del CSIC, en cuanto que Organismo Público de Investigación (OPI), marcado desde su fundación por las consecuencias de la guerra civil y la dictadura franquista. El CSIC, aunque incorporó en su estructura orgánica los centros de la JAE, se creó conforme a principios contrarios al modelo de investigación que esta representaba y afines al régimen dictatorial. Estos condicionamientos ideológicos de sus inicios influyeron en su trayectoria posterior de manera importante.

El CSIC ha acometido ya algunas acciones de memorialización en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007². Concretamente, en 2010 se cubrió la inscripción en latín que figuraba en el friso de la sede de la Organización Central, en calle Serrano, 117. La inscripción sancionaba el origen franquista de la institución:

➔ *Francisco Franco, vencedor, encargó la fundación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el mes de diciembre de 1939. La sede del instituto y la biblioteca fueron terminadas también felizmente por iniciativa de Franco en su quinto año en el mes de diciembre de 1944.*

El 8 de noviembre de 2022, la secretaria de Estado de Memoria Democrática dirigía una carta a la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia e Innovación donde se recordaba la necesidad de adoptar acciones en cumplimiento del artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática.

En seguimiento de esta comunicación, una comisión formada por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) entregó, el 22 de diciembre de 2022, el *Informe sobre la memoria democrática de la ciencia española*, donde se proponían las diferentes acciones que los ministerios relacionados y los OPI habían de emprender para acatar lo establecido en la Ley de Memoria Democrática. Tomando como referencia este informe y tras la interlocución con los vocales del entonces Ministerio de Ciencia e Innovación, la Presidencia del CSIC creó, a su vez, un grupo de trabajo para estudiar la implementación de las medidas identificadas y de otras tantas que habían surgido en el proceso de debate. A este equipo se le presentó el cuestionario del anexo I.

“

El CSIC acomete las actuaciones que establece la Ley 20/2022, de Memoria Democrática

1 Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. BOE, 20 de octubre de 2022.

2 Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. BOE, 27 de diciembre de 2007.



► Friso de la fachada del edificio central del CSIC con la inscripción original.

El grupo de trabajo estuvo compuesto por las siguientes investigadoras e investigadores: Ana Romero de Pablos (Instituto de Filosofía, IF), María Jesús Santesmases (Instituto de Filosofía, IF), Leoncio López-Ocón (Instituto de Historia, IH) y Francisco Ferrándiz (Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, ILLA), todos ellas personas expertas en políticas de memoria y justicia transicional o la historia de la ciencia y del CSIC y la JAE (*vid.* biografías en el anexo II). Las líneas de acción que convinieron fueron luego adoptadas por la Presidencia del CSIC en su reunión del 21 de marzo de 2023. Estas medidas acordadas están encaminadas a fomentar la reflexión en el CSIC sobre su relación con el régimen dictatorial y con los gobiernos democráticos. De este modo, la institución aspira a reconocer la ruptura traumática que socavó los derechos de su personal y a recuperar y tratar adecuadamente la memoria material de este siglo de investigación.

La aplicación de estas propuestas permitirá al CSIC no solo cumplir como institución con las políticas de memoria, sino también, en cuanto que colectivo humano, crear conciencia e investigación sobre su historia misma. Se pretende así el reconocimiento de su origen franquista y la reparación de las víctimas que fueron depuradas y apartadas de la práctica investigadora. De esta forma, el CSIC se compromete también con su contribución a la democracia



El friso de la fachada después de la intervención sobre la inscripción, visible en la anterior imagen.

en España desde la transición hasta la actualidad y se identifica con un futuro memorial responsable y conocedor de su historia.

Entre las medidas que el CSIC ha acometido de manera más inmediata están las relativas a la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, labor ya iniciada en 2010, en aplicación del artículo 15 de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica. La nueva ley ha venido a precisar en toda una sección los procedimientos de actuación sobre los símbolos y elementos que conviene intervenir para ajustarse a los deberes de verdad, justicia y reparación, empezando por su definición en el artículo 35.1:

➔ *Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje [sic] durante la Segunda Guerra Mundial.*

Más adelante, en el punto 4 del mismo artículo, la Ley indica cómo han de proceder las instituciones cuando existan estos símbolos o elementos en sus edificios, especificando, además, la orden de retirar de la vista pública y de espacios de uso común, los retratos y otras manifestaciones artísticas de mandatarios asociados a la sublevación militar, un patrimonio este significativo en el CSIC:

➔ *Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados o colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación. Carecerán de visibilidad los retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la dictadura. A tal efecto, no podrán mostrarse en lugares representativos y, en particular, despachos u otras estancias de altos cargos, espacios comunes de uso, ni en áreas de acceso al público.*

La Ley es clara en la responsabilidad que han de tener las instituciones en esta tarea: “Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos” (art. 35.3). Es por todo lo dicho que el CSIC ha asumido con compromiso y determinación esta tarea.